

Santiago, treinta de junio de dos mil veintiuno.

I) En cuanto al recurso de casación en la forma.

Vistos y teniendo presente:

1º) Que, en estos autos rol N°2867-2019 ha comparecido don Sergio G. Rodríguez Oro, en representación del sentenciado Oscar Patricio Ibacache Carrasco, quien interpuso recurso de casación en la forma contra la sentencia definitiva de primer grado, pronunciada por el Sr. Ministro en Visita don Mario Carroza Espinoza el 24 de enero del año 2019.

El recurrente denuncia que la referida sentencia no ha cumplido con la obligación legal de contener las consideraciones a que se refieren los números 4 y 5 del artículo 500 del Código de Procedimiento Penal, por lo que habría incurrido en la causal de anulación formal establecida en el número 9 del artículo 541 del mismo texto legal, esto es, no haber sido extendida en la forma dispuesta por la ley.

2º) Que, de acuerdo con lo que plantea el recurrente, la sentencia no contiene los considerandos de hecho y de derecho relativos a la responsabilidad penal por el mando o "responsabilidad del comandante" o "responsabilidad del superior", y que expliquen la razón por la cual su representado debe ser condenado como autor.

Agrega que la sentencia se limita a explicar como única circunstancia: "mando sobre los funcionarios de la Tenencia Cabo Tomás Pereira (considerandos 15º y 16º)."

Añade que no hay mención alguna sobre los otros elementos de hecho y de derecho que se requieren para que pueda condenarse a una persona en base a la "responsabilidad del superior" tales como: "Tipo objetivo..." Y "Tipo subjetivo...".

Denuncia que consecuente con la aplicación de la "responsabilidad penal del superior", en ninguna parte la sentencia definitiva indica qué tipo de autoría se le imputa a su representado, limitándose a expresar que ello se determina en base al "artículo 15 del CP", pero sin indicar con precisión a cuál de los tres numerales se refiere.

Argumenta que la falta de precisión es entendible dada la forma de responsabilidad penal por la cual se le ha condenado, ya que la "responsabilidad del superior" no encuadra en ninguno de los tipos de autoría o coautoría que señala el citado artículo 15, sino que corresponde a una regla de imputación penal que es reconocida en la costumbre internacional, en primer lugar, y luego en las diversas codificaciones internacionales, para terminar siendo reconocida a nivel interno.



A continuación, se extiende en explicaciones sobre el Estatuto de la Corte Penal Internacional en cuanto regula dicha responsabilidad del superior, mencionando luego la Ley N°20.357, para concluir criticando al fallo por no contener ningún análisis del derecho aplicable a dicha responsabilidad.

Por último, el recurrente pide que se anule la sentencia que impugna y, acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, se dicte el fallo de reemplazo que corresponda a derecho y al mérito del proceso, con costas. Y agrega que "En dicha sentencia de reemplazo solicito que, en primer lugar, se contengan los considerandos necesarios -de hecho y de derecho- relativos a la "responsabilidad del superior y, consecuente con dicho análisis, se dicte sentencia absolutoria de mi representado."

3°) Que el artículo 541 del Código de Procedimiento Penal dispone que "El recurso de casación en la forma solo podrá fundarse en alguna de las causales siguientes:... 9ª. No haber sido extendida en la forma dispuesta por la ley." Se advierte de inmediato, de su simple lectura, que lo que resguarda la norma transcrita es el respeto de las exigencias formales de una sentencia en materia criminal, conforme a las reglas del sistema anterior de enjuiciamiento existente en nuestro país, contenidas en el señalado Código. Dentro de tales disposiciones se encuentran las que fundan el recurso y que se ubican en el artículo 500 de ese texto legal.

El precepto precisa: "La sentencia definitiva de primera instancia y la de segunda que modifique o revoque la de otro tribunal contendrá:... 4.º Las consideraciones en cuya virtud se dan por probados o por no probados los hechos atribuidos a los procesados; o los que éstos alegan en su descargo, ya para negar su participación, ya para eximirse de responsabilidad, ya para atenuar ésta;" y "5.º Las razones legales o doctrinales que sirven para calificar el delito y sus circunstancias, tanto las agravantes como las atenuantes, y para establecer la responsabilidad o la irresponsabilidad civil de los procesados o de terceras personas citadas al juicio;"

4°) Que, en el contexto de las disposiciones legales citadas en apoyo del recurso se aprecia, ahora de la revisión de la sentencia, que ésta cumple a cabalidad con las exigencias que ellas imponen al sentenciador. Esto es, el estándar legal de la sentencia se satisface plenamente con lo expresado en la misma, en cuanto a la participación legal que cupo al sentenciado de que se trata en los hechos que se le atribuyeron, que se estimó corresponde a la de autor.



Los motivos Décimo quinto y Décimo sexto del fallo, al contrario de lo que se acusa, son lo suficientemente explicativos en relación a la participación del sentenciado Oscar Patricio Ibacache Carrasco, en términos que bastan para entender cumplida la exigencia legal que se reclama.

Se podrá reprochar a la sentencia la falta de más argumentos, o la insuficiencia de los que contiene, alegación que por lo demás es muy corriente, pero lo cierto es que los que fundan la materia alcanzan para cumplir con la exigencia legal que se supone, erradamente, omitida.

Por si lo anterior no fuere suficiente, no existe ninguna evidencia que conduzca a concluir que, de contener mayores argumentos el fallo, la decisión del fallo debiera ser la de absolver al acusado Ibacache. Lo cierto es que, tras el reproche que se presenta como relativo a la falta de formalidades en el fallo, se esconden acusaciones que apuntan al fondo del asunto, es decir, se refieren a lo sustancial y, por lo mismo, no se pueden ventilar ni tratar mediante un recurso de anulación de forma, como equivocadamente pretende la parte recurrente de casación.

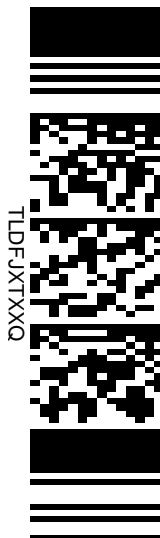
5°) Que, en consecuencia, el recurso de casación en la forma entablado no puede prosperar y debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y en conformidad, asimismo, con lo que disponen los artículos 535, 536, 536 bis, 539, 541, 543 y 544 del Código de Procedimiento Penal, se declara que **se rechaza** el recurso de casación en la forma deducido por el abogado don Sergio Rodríguez Oro, en representación del condenado Oscar Patricio Ibacache Carrasco, contra la sentencia definitiva de primer grado, pronunciada por el Sr. Ministro en Visita Extraordinaria don Mario Carroza Espinoza el veinticuatro de enero del año dos mil diecinueve, escrita a fs.3714 y siguientes la que, por consiguiente, **no es nula**.

II) En cuanto a los recursos de apelación.

Vistos y teniendo además presente:

6°) Que en estos autos se han deducido recursos de apelación por el mismo recurrente de casación formal, don Sergio Rodríguez Oro; por don David Osorio Ramos, por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos; por don Eduardo Marchant Cabrera, en representación de Fidelina de las Mercedes, María Cecilia y Luis Enrique, todos de apellidos Sepúlveda Bravo; por don Joaquín Perera Campusano, por la Unidad Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos; por doña Ruth Israel López, Abogada Procurador Fiscal de Santiago, del Consejo de Defensa del Estado, por el



Fisco de Chile y por don María Bobadilla O., en representación de Norma de las Mercedes, María Matilde, Luis Fernando y Arturo Miguel, todos de apellido Silva López.

Los argumentos de las señaladas apelaciones se refieren a materias que se tratan y que han sido adecuadamente abordadas y resueltas en la sentencia en alzada, y las argumentaciones contenidas en los aludidos escritos de apelación no resultan suficientes como para variar las decisiones que contiene dicha resolución. Tampoco la documentación acompañada en esta instancia es suficiente para cambiar las referidas decisiones.

En general, puede decirse que los querellantes abogan por la revocación de la sentencia en lo relativo a la absolució del acusado Juan Eliecer Ponce Manivet, a quien se pide condenar. Respecto de Oscar Ibacache, se cuestiona el reconocimiento de la circunstancia atenuante de responsabilidad penal que le asiste, como muy calificada, y se pide que se revoque en tal sección, estimando esa mitigante como una simple, aumentando en consecuencia la pena que se le impuso. Igualmente, se ha abogado por el reconocimiento de las circunstancias agravantes de responsabilidad penal de los números 8 y 11 del artículo 12 del Código Penal.

Los demandantes civiles, a su vez, instan por el aumento de las indemnizaciones otorgadas y el Fisco de Chile, por su parte, intenta obtener que se le libere del pago de las mismas, así como del pago de costas. Estas últimas estas contenidas en un considerando del fallo, que para estos efectos ha de considerarse resolutivo, pues ellas no se incluyeron en la sección decisoria del mismo, y se estiman procedentes, pues el Fisco no litigó con motivo plausible, habiendo sido condenado a pagar las sumas que se indican en la aludida sentencia, lo que revela que no tiene fundamento en todo lo que plantea.

Finalmente, la defensa del único condenado insiste en su absolució.

Todo lo anterior, como se anticipó, ya fue tratado en el fallo que se revisa y esta Corte concuerda con todo lo que en él se expuso, sin que resulte necesario reiterar lo que allí se dijo.

7º) Que, sin embargo de lo dicho, sí existe una cuestió que reviste la importancia suficiente como para dedicarle algunas reflexiones. Se trata de la determinación del fallo apelado en orden a estimar la circunstancia atenuante de responsabilidad penal de irreproachable conducta anterior, que concurre en la especie y que fue acogida en relación al sentenciado Ibacache como muy calificada.



Esta Corte se da cuenta de que dicha determinación es de carácter instrumental, pues permite mitigar una pena que, de otro modo, resultaría casi imposible de cumplir y, además, sería notoriamente desproporcionada, aun entendiéndose la gravedad de los hechos que se tuvieron por establecidos. Hay que tener en consideración que han transcurrido casi cincuenta años desde la comisión de los mismos, cuestión que indudablemente esta Corte debe tener presente, pues una condena atroz impuesta en un tiempo que no puede estimarse razonable bajo ninguna perspectiva, incluso aquella que apunta a las dificultades que hubo para investigar en forma oportuna, pierde el carácter de condena justa.

Por otra parte, el juez ha fundado razonablemente su decisión en esta materia, debiendo recordarse que la irreprochable conducta anterior está establecida en el número 6 del artículo 11 del Código Penal, en los siguientes términos: "Si la conducta anterior del delincuente ha sido irreprochable."

Hay que consignar que la aparente simplicidad de la definición no es tal, puesto que ella permite preguntarse, a lo menos, si se refiere a la conducta que ha tenido una persona antes de cometer el o los delitos que se le imputan, o bien la que ha observado antes de que se pronuncie sentencia condenatoria ejecutoriada en su contra y pase, formalmente, a tener la categoría de "delincuente", esto es, responsable de un ilícito, ya que a partir de dicho momento adquiere la calidad jurídica de culpable, pues así lo establece en forma expresa el artículo 42 del Código de Procedimiento Penal.

Es por ello que el juez de primer grado ha podido fundarse en circunstancias posteriores a la fecha de comisión de los ilícitos, pero anteriores a la de dictación de la sentencia y estimar, sobre la base de lo que expresa en ella, como muy calificada la única circunstancia atenuante de responsabilidad criminal que favorece al sentenciado Ibacache, sin incurrir por ello en ningún vicio.

8°) Que, finalmente, por las razones entregadas en la sentencia en examen y por lo expuesto previamente, esta Corte no concuerda con las observaciones y conclusiones contenidas en el informe expedido por la Sra. Fiscal Judicial, doña Javiera González Sepúlveda, según consta en el dictamen de fs.4056. La sentencia, en el sentir de esta Corte, fue dictada en conformidad a los antecedentes recogidos y se encuentra acorde a derecho.

Por estas consideraciones y en conformidad, asimismo, con lo que disponen los artículos 510,



512, 513, 514, 515, 527 y 528 del Código de Procedimiento Penal, se declara que **se confirma en todo lo que fue apelado** la sentencia en alzada, pronunciada por el Sr. Ministro en Visita Extraordinaria don Mario Carroza Espinoza, resolución ya individualizada.

Se previene que la Ministro (s) Sra. Merino concurre a la confirmación de la sentencia, en lo referente a su sección civil, teniendo únicamente presente que, la acción civil es prescriptible, pues no hay ningún cuerpo normativo -nacional o internacional- que lo establezca, debiendo, por tanto, aplicarse las normas de derecho común del Código Civil.

Aceptar lo contrario, en su concepto, importaría el establecimiento jurisprudencial de acciones imprescriptibles, en contra del texto expreso de la Ley, en este caso, del artículo 2497 del Código Civil, que dispone que las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, las Iglesias, Municipalidades, Establecimientos y Corporaciones Nacionales y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo.

De la cita, es posible concluir que no es efectiva la imprescriptibilidad de la responsabilidad extracontractual del Estado, ya que ni el Constituyente ni el Legislador la declaran en forma expresa, por lo cual cabe entender la vigencia de la norma general, siendo la prescripción, como institución básica de seguridad jurídica, plenamente aplicable a favor y en contra del Estado, según el caso.

Que, no obstante, y como se viene razonando, resulta pertinente aplicar al caso concreto la institución de la prescripción consagrada en nuestro Código Civil, como también, las figuras implícitas en dicha institución, como son la suspensión, interrupción, renuncia de la prescripción, etc.

En efecto, los requisitos de la renuncia a la prescripción se encuentran en las normas comunes para ambos tipos de prescripciones, específicamente, en el artículo 2494 del Código Civil que dispone: "La prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente; pero sólo después de cumplida. Renúnciase tácitamente, cuando el que puede alegarla manifiesta por un hecho suyo que reconoce el derecho del dueño o del acreedor".

Además, siempre en concepto de la Sra. Ministro previniente, para que pueda determinarse la existencia de la misma se requiere que la intención de renunciar sea inequívoca, es decir, que se desprenda de un hecho que suponga necesariamente el abandono de un derecho adquirido a través de actos



concretos del deudor. Se ha resuelto por la jurisprudencia que debe existir una manifestación de voluntad que sea realizada sin compensación alguna, por mera liberalidad o por moralidad, lo que debe desprenderse de los hechos en forma clara e incuestionable.

Así, de un atento examen de los antecedentes que obran en autos, es posible colegir que sin perjuicio de encontrarse prescrita la acción indemnizatoria, con la publicación de la Ley N°20.874, de fecha 29 de octubre de 2015, el Estado demandado ha reconocido su condición de deudor para con las víctimas de prisión política y tortura, constituyendo esta ley, un acto de renuncia a la prescripción.

En este mismo sentido, y a mayor abundamiento, la Sra. Ministro previniente hace presente lo que a su juicio constituye el último acto relevante de reconocimiento expreso del Estado en esta materia, se trata de la contestación que éste realizara ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el contexto de la demanda que interpusieran en su contra en el caso: "María Laura Ordenes Guerra y otros respecto de la República de Chile", por la responsabilidad que le cabe al violar los derechos a las garantías judiciales y protección judicial como consecuencia de la aplicación de la figura de prescripción a acciones civiles de reparación relacionadas con crímenes de lesa humanidad.

En síntesis, y en lo que nos atañe, el Estado manifestó: "[...] su voluntad de aceptar las conclusiones y las consecuencias jurídicas que de ello se derivan contenidas en el Informe de Fondo adoptado por la CIDH. En particular, señala que faltó al derecho a las garantías judiciales por no determinar el derecho de las presuntas víctimas a obtener una reparación en el ámbito civil. (...) Asimismo, la aplicación de la prescripción civil a las acciones judiciales interpuestas por las presuntas víctimas imposibilitó el otorgamiento de una justa reparación y dificultó hacer uso adecuado del recurso que es idóneo para reparar violaciones a derechos humanos.

En cuanto a las reparaciones, el Estado señaló: "al no existir controversia sobre el objeto principal de este litigio internacional, lo que procede es reestablecer los derechos que se han tenido por vulnerados y determinar el pago de la indemnización a la parte lesionada". Así, "previo a la declaración de medidas de reparación que adopte [esta] Corte, es importante para el Estado formular los siguientes alcances: En primer lugar, las causas judiciales a que se ha hecho referencia a nivel interno han sido tramitadas completamente y las



decisiones pronunciadas cuentan con el carácter de cosa juzgada, lo que hace imposible jurídicamente restituir los procesos judiciales para dictar nuevas sentencias." (...)

"No obstante, el Estado comparte que las reclamaciones de reparación por violaciones flagrantes de los derechos humanos no se encuentran sujetas a prescripción; éste es un principio que tiene asidero en la costumbre internacional, anterior a los tratados internacionales de derechos humanos, por lo que el transcurso del tiempo no puede ser impedimento para que las víctimas y sus familiares obtengan una reparación integral por los daños causados. En segundo lugar, en cuanto a la naturaleza de las medidas de reparación a ser adoptadas por [la] Corte, tomando en cuenta su competencia amplia contenida en el artículo 63.1 de la CADH, el Estado es de la opinión que, dado que la presente causa se origina por la imposibilidad de que un tribunal interno conociera el fondo de una acción cuya naturaleza es indemnizatoria de perjuicios, la reparación adecuada tendiente a hacer desaparecer los efectos de la violación cometida correspondería principalmente en la determinación de una indemnización monetaria (...)".

Lo anteriormente citado, según estima la Sra. Ministro previniente, resulta ser una manifestación expresa e inequívoca del Estado de Chile de reconocimiento de la renuncia a la prescripción.

Se previene, además, que la Ministro Sra. Villadangos estuvo por confirmar la sentencia apelada, en su sección civil, pero **con declaración** de rebajar la indemnización de cuarenta millones de pesos concedida en el fallo en estudio a los demandantes civiles Norma de las Mercedes Silva López, María Matilde Silva López, Luis Fernando Silva López y Arturo Miguel Silva López, a la cantidad de veinte millones de pesos (\$20.000.000) para cada uno de ellos.

Tiene para ello presente la segunda Sra. Ministro previniente que las angustias, padecimientos y dolores, incertidumbres, miedos, pérdidas de proyectos de vida e inseguridades, que son las circunstancias que hace presente y toma en cuenta el fallo de primer grado para regular la indemnización civil, no pueden ser iguales ni pueden causar el mismo impacto emocional para quien ha perdido un solo hermano, caso de las personas mencionadas, que para quien ha perdido tres, caso de los restantes demandantes civiles. Por lo tanto, la estimación o evaluación que se debe hacer en el primer caso conduce a reducir la apreciación de la magnitud del daño, estimando la Sra. Ministro Villadangos que ello se satisface con la cifra



señalada, esto es, veinte millones de pesos para cada uno de los aludidos demandantes.

III. En cuanto al sobreseimiento definitivo en consulta.

Vistos:

Se aprueba el sobreseimiento definitivo y parcial consultado, que es de fecha treinta de octubre de dos mil catorce y está escrito a fs. 2590.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse los autos.

Redacción del Ministro Mario D. Rojas G. quien no firma por ausencia.

Rol N°2867-2019.



Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Maritza Elena Villadangos F. y Ministra Suplente Maria Paula Merino V. Santiago, treinta de junio de dos mil veintiuno.

En Santiago, a treinta de junio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

